

LAS CONTRADICCIONES LE AFLORAN A UNIDAS PODEMOS EN EL GOBIERNO.

Las elecciones en Galicia y Euskadi castigan a Unidas Podemos en el primer examen electoral desde que está en el Gobierno • La institución monárquica, salpicada por los escándalos del rey emérito, Juan Carlos I, pasa por sus momentos más delicados • El Estado español, pendiente de la respuesta y las ayudas europeas para afrontar la crisis generada por la pandemia



Sato Díaz | @JDSato
15/07/2020

El Gobierno de coalición cumple medio año. Ya han pasado seis meses desde que, por primera vez en la historia del actual periodo democrático español, diferentes partidos se sentaran a compartir el Consejo de Ministros. En esta ocasión, como hemos descrito en anteriores artículos de esta serie que pretende analizar la evolución política española en este peculiar año 2020, el segundo acto en el Palacio de la Moncloa del presidente Pedro Sánchez aglutina no solo a ministros del PSOE, y de su partido hermano catalán, el PSC, sino también de Unidas Podemos y de sus confluencias territoriales En Comú Podem, de Catalunya, y Galicia En Común, la gallega.

El pasado mes de enero, Unidas Podemos entró a gestionar carteras ministeriales tales como la vicepresidencia segunda del Gobierno con las competencias de Derechos Sociales y Agenda 2030 por parte de Pablo Iglesias; el Ministerio de Trabajo, por Yolanda Díaz; el Ministerio de Igualdad, por Irene Montero; el Ministerio de Consumo, por Alberto Garzón; el Ministerio de Universidades, por Manuel Castells. Es la primera vez, tal y como se ha repetido hasta la saciedad, que, desde la II República, que precedió al golpe de estado de tinte fascista de Francisco Franco, hay ministros que militan en partidos a la izquierda del PSOE, y que comunistas participan en el Gobierno de España. Un inicio de legislatura y de actividad gubernamental que en ningún momento se ha podido separar de la gestión de la pandemia de covid-19, que ha golpeado con especial dureza en el Estado español y que se manifestaba en este país pocas semanas después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de coalición. A pesar de la pandemia y de sus drásticas consecuencias humanas, económicas y sociales, poco a poco otras cuestiones políticas de envergadura intentan hacerse un hueco en la agenda diaria.

[En un primer artículo](#), analizábamos la llegada al Gobierno de Unidas Podemos y cómo el Gobierno se apresuraba en gestionar la emergencia sanitaria y en dar una salida social a la crisis generada por el coronavirus, con medidas destacadas en el denominado “Escudo Social”. También, cómo la pandemia estaba generando un terremoto en estructuras de poder internacionales tales como la Unión Europea, invisible en un primer momento, otorgándole un mayor protagonismo a los estados como actores políticos en un desajustado panorama internacional.

(...) la salida de la actual crisis se puede parecer bastante a la del crack financiero del 2008: recortes en derechos sociales, empequeñecimiento de lo público y socialización de las pérdidas de las corporaciones privadas, así como cumplimiento escrupuloso de la regla de gasto. Esto coloca a Unidas Podemos en una situación muy contradictoria en el Gobierno.

Después de aquellas primeras semanas en la que parecía posible un cambio de rumbo político global y en las que los más idealistas pregonaban que llegaba el momento de proclamar que “otro mundo es posible”, [en un segundo artículo escrito en mayo](#) explicábamos cómo la tensión política española y la reorganización del establishment europeo para taponar cualquier salida rupturista con el actual modelo hacía adoptar a Unidas Podemos, y al Gobierno en general, una estrategia política centrada en la *realpolitik*: el Gobierno se abalanzaba a buscar consensos políticos para sacar adelante sus políticas, separarse de cualquier apariencia de radical para conseguir prorrogar el estado de alarma que permitía restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos y asegurar el confinamiento como método para paliar los estragos de la pandemia. Como finalidad de esta estrategia de conseguir una imagen centrada, convencer a Europa de que, a pesar de ser un Gobierno izquierdista, está en la línea que inspiran los principales ejecutivos europeos. Por todo esto, el Gobierno de coalición buscaba entendimientos en el Congreso con Ciudadanos, un partido de derechas, con un claro componente nacionalista español que, sin embargo, forma parte de la familia liberal europea.

Ahora parece evidente que no solo no existe ninguna posibilidad de cualquier tinte revolucionario como forma de solucionar la actual crisis social y económica derivada de la pandemia, sino que los poderes aprietan las tuercas y que la salida de la actual crisis se puede parecer bastante a la del crack financiero del 2008: recortes en derechos sociales, empequeñecimiento de lo público y socialización de las pérdidas de las corporaciones privadas, así como cumplimiento escrupuloso de la regla de gasto. Esto coloca a Unidas Podemos en una situación muy contradictoria en el Gobierno.



El vicepresidente Pablo Iglesias en su despacho en abril de 2020
(Foto: Dani Gago, eldiario.es)

Pablo Iglesias, en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera pública, ha repetido una frase: “Hacer política es cabalgar contradicciones”. El contexto actual arrastra a Unidas Podemos a un terreno pantanoso en el que las contradicciones son de un calibre enorme. Analizamos en este texto, por lo tanto, un contexto social y político que, como siempre, está condicionado por los vectores atávicos y transversales que acompañan a la naturaleza de la política española: la

cuestión territorial; la cerrazón de unas derechas políticas, mediáticas y económicas que, a duras penas, han conseguido romper con su pasado sociológico: la dictadura de Francisco Franco. Además, otro elemento constante: la degradación de las instituciones democráticas surgidas del llamado “consenso del 78”. Estos días, conocemos más detalles del espionaje que desde distintas estructuras policiales del Estado se ha llevado a cabo, durante los últimos años, a disidentes políticos del ámbito de Unidas Podemos y del independentismo catalán.

Momento crítico para la institución monárquica

La monarquía española pasa por un momento crítico. Esto supone un terremoto para la arquitectura institucional y política española. Cada día se conocen, a través de las filtraciones a prensa y declaraciones de la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, nuevos casos de corrupción que, supuestamente, implican al anterior monarca. Cuentas en bancos suizos, entregas de dinero de la monarquía saudí a las mismas, fundaciones pantalla en paraísos fiscales, entre otros. En pleno estado de alarma por la pandemia, el actual jefe de Estado, Felipe VI, simulaba [renunciar a la herencia de su padre](#). Mientras, Corinna sigue filtrando: “El dinero de Juan Carlos está en el Palacio de la Zarzuela y tiene una máquina para contarlo”. Durante estas últimas semanas, hemos sabido también que el emérito traía a territorio español el dinero desde Suiza a través del aeropuerto de Barajas y que sacaba 100.000 euros mensuales de Suiza entre 2008 y 2012, lo que equivaldría a 4.800.000 euros. Cada día, nuevos titulares.

No se trata de recoger aquí un somero recuento de las entregas de este folletín, sino de transmitir la importancia inmensa que este caso tiene para el Estado español. El actual jefe del estado, Felipe VI, ostenta este cargo por el único motivo de ser hijo de Juan Carlos I. En las últimas semanas, somos testigos de una campaña de lavado de imagen del actual rey que implica a los principales medios de comunicación, principales partidos políticos e instituciones del Estado. Salvar al rey, para salvar al conocido “Régimen del 78”. En este momento, en el que vuelve una grave crisis social y económica y en el que el contexto político está gravemente agitado por los problemas territoriales y la excesiva polarización entre partidos políticos, la crisis de la monarquía suma a la arquitectura institucional un mar de incertezas del que será difícil salir.



Recibimiento a Felipe VI en Bilbao y Vitoria-Gasteiz
“No hay dos sin tres, República otra vez” (Foto: EcoRepublicano)

La monarquía española pasa por un momento crítico. Esto supone un terremoto para la arquitectura institucional y política española.

En esta coyuntura, las derechas y ultraderechas, que como hemos explicado en otros artículos han intentado hacer de la pandemia el motivo por el que derrocar al actual Gobierno de coalición, ya que que no soportan ver a Pablo Iglesias y demás ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, también culpan a Sánchez e Iglesias de la crisis de la institución monárquica. Sin embargo, desde Moncloa intentan crear un cordón sanitario que separe al actual rey de los casos que salpican a su padre. Difícil tarea, cuando, según publicaciones, hay evidencias que señalan que Felipe VI estaba enterado, al menos en parte, de esos chanchullos.

Por otro lado, la otra parte de la coalición gubernamental, Unidas Podemos, conformada por partidos abiertamente republicanos, hasta ahora se ha limitado a situarse al lado de Sánchez, en palabras de Iglesias. El vicepresidente del Gobierno no ha llegado más allá de plantear la necesidad de reformar la inviolabilidad del rey por la cual no puede ser juzgado durante el reinado. Las bases de Unidas Podemos, abiertamente republicanas, difícilmente tolerarán que sus dirigentes no adopten una postura más dura con la institución monárquica si continúan conociéndose detalles que conectan a la monarquía con la corrupción. Unidas Podemos, en el Gobierno, tendrá que cabalgar con esta tremenda contradicción.

Turismo en plena pandemia

Lo decíamos antes, es imposible entrar a valorar cualquier elemento de la política española de este 2020 sin repetir que el coronavirus ha resultado ser un terremoto que ha modificado todos los planes. Y también, principalmente, ha alterado el plan de Gobierno plasmado en el Acuerdo para un Gobierno Progresista por el que se fijaban las líneas programáticas de trabajo del Ejecutivo, firmado por las dos partes del mismo, PSOE y Unidas Podemos. La gestión de la pandemia, por otra parte, pasó de unas semanas durísimas, en la que los muertos se contaban por centenares a diario, a una desescalada en la que, poco a poco, la sociedad española llegaba a una “nueva normalidad” y la actividad económica y los hábitos de vida iban tomando forma, de nuevo, tras semanas de confinamiento severo.



Control policial a la salida de Lleida (Foto: Publico.es)

Sin embargo, en pleno mes de julio, los rebrotes regresan a una velocidad mayor de la esperada y los signos de preocupación del Gobierno son cada vez más evidentes. Hoy, la gestión de estos rebrotes depende de las comunidades autónomas, que tienen transferida la competencia de sanidad, después de unos meses en los que el Ministerio de Sanidad ha centralizado la gestión de la emergencia durante el estado de alarma. Este cambio hace girar la crítica a los distintos gobiernos autonómicos de distinto signo político

en vez de centrarla en el Gobierno de Pedro Sánchez por la evolución del coronavirus. Ya se han dado rebrotes con especial intensidad en Galicia, Euskadi, Catalunya y Aragón. Cada día aparecen nuevos. Y las polémicas por el reparto territorial del poder y de las responsabilidades no cesan. Recientemente, en Catalunya, desde el poder judicial, se ha censurado el confinamiento decretado por la Generalitat de Catalunya en partes de la provincia de Lleida, pues la capacidad de limitar la libertad de movimientos de la ciudadanía depende de la declaración del estado de alarma, es decir, del Gobierno estatal y el Congreso, según interpreta este juzgado. Finalmente, los juzgados permitirán las medidas adoptadas por la Generalitat, a pesar de que, en un primer momento, no lo hiciera. Los intentos del judicial de intervenir en la política catalana son constantes. Las polémicas entre territorios por la gestión de este segundo capítulo de la pandemia no cesarán. Por ejemplo, en las recientes elecciones en Euskadi y Galicia, no se permitió que los enfermos de covid-19 fueran a votar, lo que ha abierto una disputa pues se ha coartado uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Allá por el lejano mes de marzo, cuando la tragedia se expresaba en su máximo esplendor, quedó en evidencia la incapacidad productiva del Estado español en algunas cuestiones esenciales. El tejido industrial español no se veía capaz de cubrir las necesidades primarias. No había suficientes EPI (Equipos de Protección Individual) ni siquiera para lo sanitarios que cuidaban a los enfermos; faltaban respiradores en las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) de los hospitales... Todo esto hacía que la respuesta a la emergencia sanitaria dependiera de un mercado exterior que, en aquellos momentos, parecía una batalla entre piratas. Y todo esto, además, dejaba en evidencia el desfasado modelo productivo español, basado principalmente en el turismo y la construcción, con muy poca capacidad industrial. Un modelo derivado del reparto del trabajo europeo entre el norte y el sur proveniente de la firma del Tratado de Maastricht de 1992.



Mascarilla (Foto: Álvaro Minguito. El Salto Diario)

El Gobierno, hasta el momento, sumido en la contradicción de no poder proponer una alternativa productiva.

En una comparecencia en el Congreso del ministro de Consumo, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, hacía referencia a que “España se ha especializado en sectores con bajo valor añadido, como la hostelería o el turismo”. La avalancha de críticas de empresarios del sector y de diferentes partidos de las derechas fue enorme y las tensiones internas en el Gobierno ante el descontento de un sector que representa cerca del 15% del PIB, evidentes. El día 1 de julio, se abrían las fronteras entre países integrantes de la Unión Europea para fomentar el turismo comunitario. Campañas oficiales del Gobierno de España y de diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos invitan a reactivar el turismo como algo prioritario ante la grave crisis económica que vivimos. El 15 de junio, de hecho, llegaban los primeros turistas alemanes a un hotel de Mallorca en un programa piloto. La imagen dantesca de las camareras del hotel, uno de los sectores más precarizados, aplaudiendo a la llegada de los huéspedes, quedó grabada en la retina de muchos españoles.



Trabajadores de Alcoa San Cibrao en una protesta contra el desmantelamiento de la planta en Junio 2020. (Foto: Carlos Castro)

Las contradicciones aumentan, los brotes también. Las imágenes de turistas en zonas concurridas sin llevar mascarillas de seguridad frente al contagio no se emiten en algunos de los principales programas de televisión, pero circulan con alta velocidad a través de las redes sociales. Hasta el momento, la llegada de Unidas Podemos al Gobierno no parece que arrastre un inminente cambio de modelo productivo frente al “sol y playa”. Es pronto, todavía, para juzgarlo. En contraste, la

fábrica de la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa, en la provincia gallega de Lugo, acelera el proceso de despido de sus más de 500 trabajadores. La planta automovilística de Nissan, en Barcelona, echa el cierre y unas 25.000 familias se verán afectadas por ello. Airbus anuncia un plan de ajuste que puede afectar a más de 1.500 trabajadores. Sol y playa, turismo como respuesta a la pandemia. El Gobierno, hasta el momento, sumido en la contradicción de no poder proponer una alternativa productiva.

Elecciones en Euskadi y Galicia

En el panorama político-electoral, la celebración de elecciones autonómicas el pasado 12 de julio en dos importantes comunidades del norte, Euskadi y Galicia, ha sido el hito más relevante. Cabe destacar que ambas son consideradas nacionalidades históricas, en ambas hay un sentimiento nacional diferenciado, con partidos políticos nacionalistas e independentistas, lengua propia y unos ecosistemas sociales,



Papeletas durante las elecciones (Foto: EFE)

culturales y políticos que nada tienen que ver con el ambiente que se respira en Madrid. Madrid, precisamente, como concepto político similar al centro en el que los poderes españoles disciernen sobre todos los asuntos, la llamada corte, ha sido el gran perdedor en ambos comicios.

En Euskadi, el PNV, nacionalismo vasco de derechas integrado en la familia de los liberales europeos, ha sido el vencedor de las elecciones y reeditará su coalición gubernamental, salvo giro de guion inesperado, con los socialistas, los cuales mantienen sus resultados anteriores mejorándolos un poco. La subida espectacular de la izquierda independentista de EH Bildu contrasta con la debacle de Elkarrekin Podemos, la marca territorial de Unidas Podemos, que pierde casi la mitad de su presencia en el Parlamento vasco. Baja también el PP, que nunca había tenido una gran presencia en este territorio y que en esta ocasión concurría en coalición con Ciudadanos. Entra, por primera vez en este hemisferio la ultraderecha de Vox, con una diputada. En Galicia, amplía su mayoría absoluta el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien puede hacer sombra al líder estatal conservador, Pablo Casado, actualmente en horas bajas y de talante más radical que el gallego. Cada vez más analistas ven al presidente gallego como futuro candidato a la Moncloa por los populares, en detrimento de Casado. La coalición hermana de Unidas Podemos, que era segunda fuerza en la pasada legislatura, desaparece del Parlamento gallego. El batacazo ha sido espectacular. Sin embargo, sube la izquierda soberanista del BNG, que será la segunda fuerza. Los socialistas se mantienen, algo por debajo de lo que estaban.

Euskadi y Galicia, (...) hay un sentimiento nacional diferenciado, con partidos políticos nacionalistas e independentistas, lengua propia y unos ecosistemas sociales, culturales y políticos que nada tienen que ver con el ambiente que se respira en Madrid.

Las lecturas en clave de política estatal de estos resultados son múltiples. En primer lugar, cabe destacar que se acentúa la crisis territorial, siempre presente en el Estado español. Los partidos nacionalistas o independentistas han aumentado su influencia en estas elecciones. Desde las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019, son absolutamente necesarios para generar mayorías parlamentarias en el Congreso y fue todo este crisol de fuerzas territoriales el que dio a Sánchez la mayoría en la investidura para que saliera adelante el Gobierno de coalición. Esto cabe resaltarlo porque, tras unos años en los que la crisis catalana ha estado muy caliente, el Gobierno de coalición llegó, precisamente, con el objetivo de comenzar un proceso de desescalada y diálogo con el independentismo catalán. Tras los resultados del 12 de julio, se evidencia que el problema territorial es múltiple, no solo catalán. En Euskadi, PNV y EH Bildu suman 53 de los 75 escaños que se reparten en el Parlamento vasco. Si el Gobierno de coalición no afronta el reto y comienza un proceso de reforma territorial en el Estado, hay mimbres para que el frente catalán no sea el único y los conflictos se multipliquen.



Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar celebran el triunfo del PNV en Sabin Etxea (Foto: RTVE.es)



El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo (Foto: RTVE.es)

Otra lectura imprescindible de estos comicios es que el Gobierno de coalición no supera su primer examen, desde que se formó, en las urnas. Esto incumbe especialmente a Unidas Podemos, que ha obtenido unos resultados desastrosos en unos territorios con un simbolismo especial para la confluencia izquierdista. En Euskadi, fueron primera fuerza en las generales del ciclo 2015-2016. En Galicia, fueron la segunda en aquellos momentos. Pero en ese segundo territorio, además, las distintas mareas municipalistas, que surgieron en el entorno de Podemos en el año 2015, ganaron tres de los ayuntamientos de las principales ciudades gallegas: Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol. En las elecciones municipales del año pasado, estas confluencias de izquierdas perdieron estos ayuntamientos. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha tenido una

visibilidad notable desde que se formara el Gobierno de coalición, es gallega. Ni su presencia en la campaña electoral de su tierra, ni tampoco la de Pablo Iglesias han servido para maquillar algo los resultados. Ni un solo diputado de Unidas Podemos en Galicia, por lo que se convierte en fuerza extraparlamentaria.

Ríos de tinta ya se están escribiendo sobre los motivos del desastre de estas elecciones para Unidas Podemos. A mi juicio, hay varias causas, no solo una: la falta de implantación organizativa y territorial de Podemos, una formación con escasas bases y muy centrada en torno a su líder estatal, Pablo Iglesias, y, ahora, en la labor de gobierno; las constantes batallas internas en la formación

(..) el Gobierno de coalición no supera su primer examen, desde que se formó, en las urnas (...) Unidas Podemos ha obtenido unos resultados desastrosos en unos territorios con un simbolismo especial para la confluencia izquierdista.

morada y confluencias; una comunicación política centrada en la visión madrileña del Estado, desde los medios de comunicación de Madrid, en el que juegan la partida Iglesias y los suyos olvidando la rica pluralidad territorial y nacional del Estado español; un retorno a los porcentajes de voto que conseguía IU en solitario antes del nacimiento de Podemos en 2014. Además, huelga decir que la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos no ha sido revalidada por el electorado de izquierdas de estos dos

importantes territorios. El moderantismo que imprime gobernar con el PSOE parece no gustar a las bases de izquierdas, al menos, en estas dos comunidades autónomas, donde han buscado otras alternativas en formaciones soberanistas. Crisis electoral, por tanto, en Unidas Podemos al poco de entrar en el Gobierno. Las contradicciones aumentan, como decíamos, por momentos.

El fracaso europeo de Calviño

La salida de la presente crisis económica y social derivada de la pandemia depende, en buena medida, de las políticas de reconstrucción que se decidan en el ámbito europeo y de los fondos económicos que lleguen a los estados. Los próximos días serán claves en este sentido. Las negociaciones al más alto nivel están teniendo lugar en distintos despachos europeos. La Unión Europea se juega mucho, algunos dicen que, incluso, su propia supervivencia. Es difícil predecir el futuro, pero parece evidente que ante el nuevo drama económico y social que llega, si la Unión Europea no se atreve a dar una respuesta acorde a las expectativas del sur de Europa más golpeado por el coronavirus, el euroescepticismo puede calar en estas sociedades. Tras el Brexit y el avance de los ultras en los países de Visegrado, si este sentimiento se intensifica en el sur, podría suponer un nuevo frente letal para la deriva comunitaria.

En este contexto, hasta el momento, las señales recibidas no son muy halagüeñas en las últimas semanas. El presidente Sánchez ha recorrido en los últimos días diferentes cancillerías intentando convencer a distintos líderes europeos del plan abanderado por Angela Merkel y Emmanuel Macron. Este plan pretende destinar 750 millones de euros de fondo a las economías más castigadas por la crisis del coronavirus, de los cuales se prevé que 140 tienen como destino el español. La cumbre, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de julio, será esencial para conocer la implicación europea en la resolución de esta crisis y, por tanto, el propio destino de la Unión.

Ante la premura de estas fechas, pocos días después de la escritura de este artículo tendrá lugar la cumbre y, seguramente, el artículo será publicado después de la misma, no haremos más elucubraciones sobre lo que puede pasar. Ya habrá tiempo de analizar las cuestiones europeas conforme las hipótesis se vayan convirtiendo en certezas. Pero, como aperitivo, sí que caben unas pinceladas de cómo, al menos en buena parte de la izquierda española, se percibe lo que viene. La



Líderes de la UE decidiendo el futuro del presupuesto europeo y el fondo de compensación por la pandemia el 17.07.20 en Bruselas (foto: François Lenoir, Reuters)

figura del primer ministro holandés, Mark Rutte, es cada vez peor vista por sus constantes apelaciones a que el Estado español no ha hecho las reformas necesarias desde la anterior crisis y a las indicaciones sobre que los fondos económicos que lleguen al sur deben ir acompañados de un programa de reformas. Esto último hace prever que los conocidos hombres de negro, que en la anterior crisis causaron estragos especialmente en Grecia, podrían volver a tomar protagonismo, que los recortes y las imposiciones en materia de rebajas fiscales puedan suponer que el Gobierno de coalición no pueda desarrollar un programa de izquierdas. No está clara cuál es la postura de Unidas Podemos con respecto a Europa en estos momentos de coalición con el PSOE. Lo que sí es evidente es que, si la presión europea implica que Unidas Podemos ha de gestionar recortes desde el Consejo de Ministros, la contradicción política será mayúscula y el descontento de sus votantes también, así como la desconexión con buena parte de los movimientos sociales.

(..) si la presión europea implica que Unidas Podemos ha de gestionar recortes desde el Consejo de Ministros, la contradicción política será mayúscula y el descontento de sus votantes también, así como la desconexión con buena parte de los movimientos sociales.

Ha existido un capítulo previo a la cumbre digno de mención: el fracaso de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en su intento de ser elegida presidenta del Eurogrupo. En la votación entre los responsables de economía y de finanzas europeos, los integrantes de este club supranacional, por un único voto de diferencia salió elegido el ministro liberal de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, el pasado 9 de julio. La noticia cayó por estas latitudes como un jarro de agua fría. Desde el Gobierno y los principales medios de comunicación, se vendió, previamente, la idea de que la operación estaba casi cerrada y que Caviño sería quien presidiría el Eurogrupo en los próximos años. No fue así. Sánchez se había volcado en intentar cerrar y asegurar los apoyos necesarios. Alguien votó distinto a lo prometido, en palabras de la propia aspirante. Otra lectura del fiasco de la vicepresidenta en Europa apunta a que se endurecerán las condiciones para países del sur, como Italia o el caso español, a la hora de recibir los fondos de reconstrucción.



Nadia Calviño, Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Foto: EFE)

La figura de Calviño es controvertida. Para Unidas Podemos, la vicepresidenta económica es el principal dique de contención en el seno del Consejo de Ministros a las propuestas de mayor calado social y gasto e inversión pública. Calviño fue, cabe recordar, una de las integrantes del Gobierno más reacias al confinamiento de la población el pasado mes de marzo, argumentando las consecuencias económicas que una medida de este calibre tendría. La actual responsable de Economía del Gobierno de coalición, a pesar de su afiliación socialista, es amiga de las doctrinas

económicas de corte neoliberal que han dominado en la Unión Europea las últimas décadas, tales como la imposición de la senda de déficit o la priorización del pago de la deuda, entre otras cuestiones. Calviño es muy bien vista en los foros comunitarios, pues antes de integrarse en el primer Gobierno de Sánchez trabajó como alta funcionaria europea en distintas direcciones

generales de la Comisión Europea. La última de ellas, la Dirección General de Presupuestos, cargo que desempeñó desde 2014, todavía era una etapa dura de la anterior crisis, bajo el mando del comisario alemán Günther Oettinger.

Cuando en el año 2018 Calviño ingresó en el primer Gobierno de Sánchez, este en solitario, sin la coalición con Unidas Podemos, las críticas desde las izquierdas a su figura fueron constantes. Calviño representaba, para los principales dirigentes de Podemos y de IU, la mejor expresión de la ortodoxia neoliberal. Cuando el pasado 25 de junio se anunciaba la candidatura de la vicepresidenta para presidir el Eurogrupo, tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón, ambos militantes comunistas, elogiaron el perfil de la ministra en medios de comunicación. Más tiempo tardaron en hacerlo Pablo Iglesias e Irene Montero. Algunos dirigentes del espectro de las izquierdas, como el responsable económico de IU, Carlos Sánchez Mato, no tardaron en criticarla públicamente. Las contradicciones, en el Gobierno, se intensifican.

De momento, los ricos no pagan la crisis

Unidas Podemos había presionado en las últimas semanas con la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas para ayudar a pagar el aumento de gasto público como respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia. Desde diferentes izquierdas políticas y sociales se venía apretando en este sentido en los últimos meses. La propia IU, integrante de Unidas Podemos, había presentado un plan de reconstrucción en el que se incluía las subidas de impuestos ya existentes de forma que pagaran más el 3% más rico del país. El partido Anticapitalistas, que desde hace unos meses está fuera de Podemos en buena parte por las discrepancias en la estrategia de cogobernar con el PSOE, lanzaba la campaña #QuePaguenLosRicos con un buen seguimiento en redes sociales. En el Congreso, distintas izquierdas como ERC, EH Bildu o Más País, el partido verde del ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, defienden una “tasa covid” o un impuesto a las grandes fortunas.



Campaña #QuePaguenLosRicos de anticapitalistas.org

A pesar de todo esto, el pasado 24 de junio se cerraba la Comisión por la Reconstrucción en el Congreso y, en esta materia, Unidas Podemos compraba la postura del PSOE. PSOE y Unidas Podemos entregaban un documento conjunto que recoge las aspiraciones de ambas formaciones de cara a cómo afrontar la reconstrucción. En el texto, ninguna mención a un impuesto a las grandes fortunas. El PSOE acepta que habrá que subir algunos tipos impositivos, pero no la creación de un impuesto nuevo a los más ricos bajo el argumento de que va en contra de la línea marcada desde Europa de flexibilización fiscal. De nuevo, una contradicción para Unidas Podemos. Al día siguiente, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, el catalán Jaume Asens, intentaba ser contundente desde la tribuna: "No vamos a renunciar al impuesto a las grandes fortunas, que le quede claro a todo el mundo". Pero el documento estaba ya registrado, y no había ninguna referencia a este impuesto.

Medidas sociales con sello de Unidas Podemos

El Gobierno de coalición, desde que inició la pandemia, ha ido desarrollando una batería de políticas sociales que hemos ido describiendo en artículos previos. Bajo la denominación de “Escudo Social”, estas políticas han intentado paliar los estragos de la crisis para “que nadie quede atrás”. Entre ellas, las más relevantes han sido la puesta en marcha de un mecanismo de ERTE desde el Ministerio de Trabajo, para evitar despidos por la crisis. [El Ingreso Mínimo Vital](#) de carácter estatal o la prohibición de desahucios durante el estado de alarma, la moratoria en el pago de alquileres o evitar que haya cortes de suministros básicos en aquellos hogares que no los hayan podido pagar también han sido impulsadas desde el Consejo de Ministros. Todas estas medidas tienen un claro sello de Unidas Podemos, que está dejando su impronta al participar en el Gobierno. En las últimas semanas, se han prorrogado estas políticas. El pasado 7 de julio, el Gobierno ampliaba este escudo en el tiempo, hasta finales de septiembre. Las medidas excepcionales que se alargan, en principio, hasta el otoño, son: la prórroga de los contratos de alquiler de la vivienda habitual, ampliación del plazo de moratoria del pago de alquileres y moratoria de deuda hipotecaria, también se alarga el plazo de percepción del bono social y las garantías de suministro de agua, gas y luz para los hogares.



Imagen Campaña Ingreso Mínimo Vital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Las medidas excepcionales que se alargan, en principio, hasta el otoño, son: la prórroga de los contratos de alquiler de la vivienda habitual, ampliación del plazo de moratoria del pago de alquileres y moratoria de deuda hipotecaria, también se alarga el plazo de percepción del bono social y las garantías de suministro de agua, gas y luz para los hogares.

Además, el pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros ponía en marcha un paquete de crédito de 100 millones de euros para las comunidades autónomas para distintos programas, tales como protección de las familias en riesgo de pobreza y atención a la pobreza infantil; garantizar el derecho a la alimentación, ocio y cultura de los niños en el periodo estival de vacaciones escolares; mantener la red de servicios sociales de ayuntamientos; prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. Una medida relevante es que el Gobierno permitirá el gasto del superávit de los ayuntamientos, una medida muy reclamada desde el ámbito municipal en los últimos años.

Movilización social

Desde que se instaló la pandemia en el Estado español, la movilización social ha descendido notablemente por cuestiones obvias, las medidas para prevenir contagios conllevan el distanciamiento físico interpersonal. Aun así, se han visto diferentes movilizaciones sociales durante estos meses. En el anterior artículo de esta serie, explicábamos cómo en algunos barrios adinerados de Madrid comenzaron unas protestas contra el Gobierno y el confinamiento, siguiendo la estela negacionista de la pandemia de otras ultraderechas como la de Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, las cuales se expandieron por distintas ciudades españolas para pedir la dimisión del Gobierno. Estas protestas, en la mayoría de las ocasiones alentadas por la ultraderecha, fueron desapareciendo conforme se abrieron bares y terrazas. Algunas se mantienen, minoritarias, como las concentraciones de ultraderechistas que se dan en las inmediaciones de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

La movilización social de la izquierda se ha visto muy disminuida durante estos meses por los motivos descritos. Sin embargo, ha habido algunas movilizaciones dignas de reseñar, como son las de los trabajadores de la fábrica de Nissan en Barcelona, que llevan semanas saliendo a las calles de la capital catalana para reivindicar, en un primer momento, el que no se cerrara la planta y, posteriormente, que una intervención pública que permita mantener los puestos de trabajo. En la misma línea, los trabajadores de la planta de Alcoa de la provincia de Lugo también han protagonizado algunas de las protestas más relevantes de las últimas semanas y reclaman una intervención pública para evitar el cierre.

(..) la movilización social ha descendido notablemente por cuestiones obvias, las medidas para prevenir contagios conllevan el distanciamiento físico interpersonal.

Llama la atención, en la Comunidad de Madrid, la huelga convocada por los MIR (Médico interno residente) en los últimos días. Estos jóvenes médicos protestan por las condiciones abusivas, bajos salarios y muchas horas extras ante la presión de la pandemia, en esta comunidad gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, la tendencia más neoliberal y ultraderechista de este partido, tal y como explicamos en un artículo anterior. Esto contrasta, precisamente, con que, en los últimos meses, el valor simbólico del médico y de todo el personal sanitario se ha revalorizado en la sociedad por

motivos evidentes. El desmantelamiento de lo público que lleva en la Comunidad de Madrid el PP, que lleva 25 años gobernándola, es digno de estudio.

Por último, cabe citar tres movilizaciones más. El pasado 7 de junio, integradas en la oleada internacional de protestas del movimiento Black Lives Matter de repudia al asesinato de George Floyd por un policía estadounidense, centenares de personas en Barcelona y algunas miles en Madrid salieron a las



Lectura del manifiesto en la manifestación de Madrid (Foto: El Salto Diario)

calles en solidaridad antirracista. En el caso de Madrid, al menos, llamó la atención la cantidad de gente joven racializada que lideraba la marcha. Quizás estemos ante un embrión de un movimiento que, también aquí, tenga mucho que decir en el futuro. Por otro lado, entorno al 28 de junio, con motivo del Orgullo LGTBI, tuvieron lugar convocatorias en distintas ciudades. En Madrid, donde este año se suspendieron los actos del Orgullo mainstream, el Orgullo Crítico, de tendencia anticapitalista, volvió a tomar las calles del centro. Por último, la plataforma por un Plan de Choque Social salió a la calle el pasado 20 de junio, reuniendo en Madrid a miles de personas, reclamando servicios públicos frente al modelo privatizador.



Concentración #OrgulloLGTBI en Valladolid el Domingo 28 de Junio de 2020 (Foto: Redes Sociales de Anticapitalistas Valladolid)